

Secretario General

=====
 =====
 =====
 =====

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BENITO ALEXIS MOJICA, A FAVOR DE ROBERTO MARTÍNEZ ÁBREGO, CONTRA LA FISCALÍA AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO CIGARRUISTA CORTÉZ. PANAMA, VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE DOS MIL DOS (2002).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Benito Alexis Mojica, interpuso acción de habeas corpus a favor de ROBERTO MARTÍNEZ ÁBREGO y contra la FISCALÍA AUXILIAR DE LA REPÚBLICA.

Librado el mandamiento el 18 de febrero de 2002 (f. 5), la autoridad demandada, mediante Oficio N° 2328 de 19 de febrero de 2002, rindió el siguiente informe:

"A) Esta Agencia del Ministerio Público no ha ordenado; en forma verbal ni escrita, la detención preventiva de ROBERTO MARTÍNEZ ÁBREGO.

B) Como consecuencia de lo expresado en el punto anterior, no existen razones de hecho ni de derecho que aducir.

C) El señor ROBERTO MARTÍNEZ ÁBREGO, no se encuentra bajo nuestra órdenes, pero cabe señalar que el mismo fue desaprehendido en la Agencia de Instrucción Delegada de la Policía Técnica Judicial de San Miguelito, mediante oficio 0147-02 AID-S.M., del 14 de febrero del presente año que corresponde a la denuncia S.M. de la misma fecha, relacionado a la denuncia S.M. 1194-01.

Informamos que los expedientes antes mencionados se encuentran en la Policía Técnica Judicial, Agencia de San Miguelito." (f. 6).

Del anterior informe se desprende que Roberto Martínez Ábrego no se encuentra privado de su libertad corporal, por lo tanto, procede aplicar lo establecido en el artículo 2581 del Código Judicial que señala textualmente: "El procedimiento de Habeas Corpus cesa una vez que el detenido haya recuperado, por cualquier causa, su libertad corporal...".

En mérito de lo expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA EL CESE DEL PROCEDIMIENTO, dentro del presente proceso de habeas corpus promovido a favor de ROBERTO MARTÍNEZ ÁBREGO y el archivo del expediente.

Notifíquese,

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.	(fdo.) ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ	(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES		(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS		(fdo.) WINSTON SPADAFORA FRANCO
(fdo.) JOSE A. TROYANO	(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.	(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
	Secretario General	

=====
 =====
 =====

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LICENCIADO MARTÍN MOLINA CONTRA LAS FRASES "LEGÍTIMOS" E "HIJOS LEGALMENTE RECONOCIDOS", CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 816 DEL CÓDIGO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: WINSTON SPADAFORA FRANCO. PANAMA, 15 (QUINCE) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOS (2002).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Martín Molina, actuando en su propio nombre y representación, ha promovido demanda de inconstitucionalidad contra las frases "legítimos" e "hijos legalmente reconocidos" contenidas en el artículo 816 del Código Civil.

I. DISPOSICION LEGAL ACUSADA

El artículo 816 del Código Civil es del tenor siguiente:

"Artículo 816. El derecho de alimentos que la ley da a los hijos o descendientes legítimos e hijos legalmente reconocidos, pertenece por reciprocidad a los padres y ascendientes y se extinguirá por la muerte del alimentista, conforme al artículo 243. (El destacado es nuestro)

II. TEXTO CONSTITUCIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO

A juicio de la parte actora, las frases impugnadas infringen de manera directa, el artículo 56 de la Constitución Política, que ha dispuesto expresamente lo siguiente: "Los padres tienen para con sus hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto de los nacidos en él. Todos los hijos son iguales ante la Ley y tienen el mismo derecho hereditario en las sucesiones intestadas. La ley reconocerá los derechos de los hijos menores o inválidos y de los padres desvalidos en las sucesiones testadas."

Sostiene el demandante, que la infracción constitucional se presenta de manera clara, al constatarse que el principio constitucional de igualdad de los hijos ante la Ley, se ve directamente afectado por la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos contenida de manera implícita en el artículo 816 del Código Civil. Por ello, y de acuerdo a la argumentación presentada, el actor solicita al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que declare la inconstitucionalidad de las frases impugnadas.

III. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

El señor Procurador General de la Nación, funcionario encargado de emitir concepto en relación a la pretensión constitucional, comparece al proceso a través de la Vista Fiscal No. 25 de 12 de octubre de 2001.

El dictamen rendido discrepa de las argumentaciones del impugnante, y sostiene que las frases impugnadas no infringen la norma constitucional invocada, pues por el contrario, enfatizan la igualdad que tienen los hijos (legítimos y legalmente reconocidos) al derecho de percibir o dar alimentos. El agente colaborador de la instancia explica su postura de la siguiente manera:

"En cuanto al contenido mismo de la demanda que nos ocupa, considero que no tiene ningún fundamento jurídico, ya que como hemos dejado sentado, la intención de la norma impugnada es la de "equiparar igualitariamente" el derecho a alimento, pues aunque el demandante no lo menciona, el uso de la "y", como conjunción copulativa, pareciera acentuar esta equiparación entre los hijos, ya que el texto y el alcance del artículo 816 del Código Civil, no establece ninguna diferenciación en cuanto a los derechos de ambos a obtener una pensión alimenticia de los herederos testamentarios..."

Conforme al criterio jurídico antes citado, la Procuraduría General de la Nación solicitó a esta Superioridad, que niegue la declaratoria de inconstitucionalidad de las frases censuradas.

Una vez cumplidos los trámites de Ley, la Corte pasa a decidir sobre la iniciativa presentada.

IV. EXAMEN DEL TRIBUNAL

El artículo 816 del Código Civil, recogido dentro del Capítulo "De los Derechos de los Hijos" contenido dentro del Libro Tercero "De la Sucesión por causa de muerte y de las Donaciones entre vivos", establece por una parte, el derecho de los hijos o descendientes legítimos y de los hijos legalmente reconocidos, a percibir alimentos por parte del causante; a la vez prevé la reciprocidad en esta materia, en beneficio de los padres o ascendientes.

Se afirma en la demanda, que las frases "legítimos" e "hijos legalmente reconocidos" contempladas en el artículo 816 ibídem, entraña una distinción entre los hijos, que infringe de manera directa el artículo 56 de la Constitución Nacional.

Una vez examinados atentamente los argumentos del impugnante, esta Superioridad constata que el artículo 56 del Texto Fundamental, es diáfano al señalar la igualdad de los hijos ante la ley. De allí, que la Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa al destacar que cualquier diferenciación en cuanto al status jurídico de los hijos, o cualquier calificativo que distinga la naturaleza de la filiación, como lo es mención de hijos legítimos (para diferenciarlos de los llamados hijos ilegítimos o naturales), debe ser abolido.

Así, en sentencia de 30 de diciembre de 1965, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los artículos 164-170 del Código Civil, contenidos en el Título X del Libro III ibídem, denominado "Hijos Legitimados", porque consideró que los términos "legítimos" y "naturales" contenidos en dichas normas, violaban claramente los artículos 58 y 59 de la Constitución de 1946, equivalentes a los artículos 56 y 57 del Texto Constitucional vigente.

A la luz de la nueva realidad constitucional, que ha borrado las diferencias jurídicas entre los hijos por razón del carácter de la unión de sus padres, toda legislación que haga referencia a "hijos legítimos", implica necesariamente un resabio de la antigua y superada distinción entre los hijos habidos dentro del matrimonio y los nacidos fuera de éste, por lo que viola los preceptos contenidos en los artículos 56 y 57 de la Carta Fundamental. La postura de la Corte a este respecto, quedó claramente consignada en la sentencia de 26 de octubre de 1994, cuando confrontada con una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 217 del Código Civil, esta Superioridad indicó lo siguiente:

"Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que casi todo nuestro ordenamiento jurídico nacional ha abolido los términos "hijos legítimos e hijos naturales" dentro de sus cuerpos legales, en razón de la igualdad existente a partir de 1946 de todos los nacidos frente a sus progenitores..."

De allí, que el Pleno considera que la frase "legítimos" contenida en el artículo 816 del Código Civil, viola el artículo 56 de la Constitución Política, y el artículo 57 ibídem, que establece de manera expresa: "Queda abolida toda calificación sobre la naturaleza de la filiación."

En el mismo sentido, la Corte estima que la expresión "hijos legalmente reconocidos" contenida en el artículo 816 ibídem, entraña una violación al artículo 56 y 57 del Texto Fundamental. El fundamento que sostiene la decisión del Tribunal Constitucional en este sentido, es el siguiente:

Si bien es cierto, el derecho positivo panameño, a través del Código de la Familia (arts. 235 y siguientes) aborda la figura del reconocimiento de los hijos (ya sea el reconocimiento de maternidad o paternidad voluntario, legal o judicial), como mecanismo que posibilita el otorgamiento de los respectivos derechos filiales, un estudio detenido del contexto legal e histórico de la disposición del Código Civil ahora examinada, revela que la frase "hijos legalmente reconocidos" no dice relación con la figura de la filiación regulada en tiempos más recientes por el Código de la Familia (que no estaba vigente al momento en que entró a regir el Código Civil de 1917), sino que obedecía a la existencia de una categoría particular de hijos, -los llamados "hijos naturales"-, que según el tácitamente derogado artículo 215 del Código Civil, era la única categoría de hijo ilegítimo que podía "ser reconocido", y al que por ende, le asistían ciertos derechos como el derecho de alimentos.

A este respecto, nos permitimos citar los comentarios esgrimidos por el Doctor César Quintero en su Obra "Derecho Constitucional", publicada en el año 1967, quien al referirse a los sistemas de determinación de la filiación que han existido en nuestro país, y abordar específicamente el tema de los "hijos naturales" y el "reconocimiento del hijo natural" señalaba lo siguiente:

"Nuestro Código Civil (aprobado por la Ley 2 de 1966 (sic), pero puesto en vigencia el 1° de octubre de 1917) adoptó, sobre esta materia, un régimen similar al que establece la ley colombiana de 1936. Es decir, el Código Civil panameño abandonó el primer sistema que hemos examinado e introdujo el segundo. Este, como acabamos de decir, es el que manteniendo la diferencia fundamental entre hijos legítimos e ilegítimos, confiere a éstos, no obstante, ciertos derechos o la posibilidad de obtenerlos.

Pero nuestro Código mantiene, a su vez, una subdivisión dentro de la categoría de hijos ilegítimos. Pues, si bien no utiliza los tradicionales calificativos de adúlterinos, incestuosos, sacrílegos, etc., clasifica a los ilegítimos (que son los habidos fuera del matrimonio) en naturales y en 'hijos ilegítimos en quienes no concurra la condición legal de naturales'.

Los naturales, según el artículo 214 del Código, son 'los habidos fuera del matrimonio, de padres que al tiempo de la concepción de aquéllos podían casarse legalmente'.

Y, de acuerdo con el mismo Código, sólo el hijo natural podía ser reconocido por el padre (artículo 215)"

En el contexto de este escrutinio, no es difícil colegir que la expresión "...e hijos legalmente reconocidos" completa y complementa la frase "el derecho

de alimentos que la ley da a los hijos o descendientes legítimos", para significar con ello que tanto los hijos habidos dentro del matrimonio, como los hijos naturales reconocidos por el padre, tenían el derecho a recibir y prestar alimentos.

La Procuraduría General de la Nación sostiene a este efecto, que la norma en cuestión "coloca a ambas categorías de hijos en la misma situación legal", por lo que no se produce violación al texto constitucional. Sin embargo, y conforme al criterio que de manera sistemática esta Superioridad ha venido reiterando, cualquier calificativo a la naturaleza de la filiación debe ser eliminada de nuestro ordenamiento jurídico, por infringir los artículos 56 y 57 del Texto Fundamental.

El criterio anterior se ve reforzado en el negocio sub-júdice, al constatar que la eliminación de las frases impugnadas deja incólume el derecho y deber recíproco de padres e hijos, de prestarse alimento en las condiciones reseñadas por el artículo 816 del Código Civil; resulta de bulto acotar, que en el contexto de la norma ibídem, este derecho-deber se origina en la existencia de una relación filial legalmente reconocida.

Por ende, esta Superioridad considera que procede la declaratoria de inconstitucionalidad solicitada por el demandante.

De consiguiente, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA:

1-QUE ES INCONSTITUCIONAL la frase "legítimos" contenida en el artículo 816 del Código Civil; y

2-QUE ES INCONSTITUCIONAL la frase "e hijos legalmente reconocidos" contenida en el mismo artículo 816 del Código Civil.

Por virtud de esta declaratoria de inconstitucionalidad, el texto del artículo 816 del Código Civil quedará como sigue:

"Artículo 816. El derecho de alimentos que la ley da a los hijos o descendientes, pertenece por reciprocidad a los padres y ascendientes y se extinguirá por muerte del alimentista, conforme al artículo 243."

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) WINSTON SPADAFORA FRANCO

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) ALBERTO CIGARRUISTA CORTÉZ

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.

(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z.

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES R.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==x==x==x==x==x==x==x==x==x==

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LA LICENCIADA MARCELA GOMEZ DE ANTINORI, EN REPRESENTACIÓN DE ALDO BERNARDINI, S. A. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 19 DE JUNIO DE 2000, PROFERIDA POR EL LICENCIADO OCTAVIO AMAT, MAGISTRADO DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA P. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DE DOS MIL DOS (2002).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS

La licenciada Marcela Gómez de Antinori, actuando en nombre y representación de la sociedad ALDO BERNARDINI, S.A, ha interpuesto acción de inconstitucionalidad contra la Resolución de 19 de junio de 2000, proferida por el Magistrado Octavio Amat del Primer Tribunal Superior de Justicia.

Admitida la demanda por cumplir con las exigencias que determina el artículo 2560 del Código Judicial, se corrió traslado del expediente al Procurador General de la Nación, para que emitiese concepto.

Dentro de este contexto, vencido el término de lista, el Pleno de la Corte Suprema procede seguidamente a decidir el proceso de inconstitucionalidad instaurado contra el acto jurisdiccional impugnado.

Resulta importante destacar que, como antecedente del presente proceso, tenemos que la resolución atacada de inconstitucional fue objeto anteriormente